



Bogotá, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA:

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00121-00

ACCIONANTE: OMAR ANTONIO SERRANO MONTERO

ACCIONADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES “COLPENSIONES”

CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

Procede el despacho a tomar la determinación que en derecho corresponda, dentro del trámite de verificación de cumplimiento de fallo de tutela – incidente de desacato, promovido por **OMAR ANTONIO SERRANO MONTERO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, conforme a las manifestaciones hasta ahora vertidas en la actuación por las partes.

I. SITUACIÓN FÁCTICA

Mediante fallo de tutela, este estrado el 03 de mayo de 2022, amparó el derecho constitucional fundamental al debido proceso de **OMAR ANTONIO SERRANO MONTERO**, ordenando a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, proceda a realizar todos y cada uno de los trámites internos que se requieran para la consecución de la remisión del expediente contentivo de la pérdida de capacidad laboral del accionante a la junta regional de calificación de invalidez respectiva.

El 18 de febrero de 2022, mediante mensaje electrónico remitido al buzón de correo institucional del estrado, la dirección de acciones constitucionales de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”**, informo que mediante el Oficio No. 2022_5236314/2022_51174162022_5648128 de 10 de mayo de 2022, remitido a la dirección aportada por el accionante para efectos de notificación. Dio cumplimiento al fallo de tutela y así se lo informo.

Radicado de documento de respuesta: OFICIO ML -H No. 10948 de 2022

Con fecha: 05 de mayo de 2022.

Medio de notificación: física.

Dirección de notificación: Calle 19 No. 5 – 51, oficina 202 centro edificio Valdés Bogotá.

Fecha de notificación al accionante: 12 de mayo del 2022.

Lo anterior se constata con la certificación expedida con la guía No. MT700187446CO de la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72, la cual establece que la respuesta al mencionado derecho de petición se entregó en la dirección fijada por el accionante para tal fin.

I. Para resolver se CONSIDERA:

Inicialmente, debe hacerse alusión al instituto del incidente de desacato y su desarrollo



jurisprudencial. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU 034 de 2018, con ponencia del Mg. ALBERTO ROJAS RIOS ha manifestado:

El incidente de desacato es un instrumento procesal para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales amparados mediante la acción de tutela, que tiene lugar cuando el obligado a cumplir una orden de tutela no lo hace. En este trámite incidental, el juez constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, puede sancionar con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes judiciales encaminadas a restaurar el derecho vulnerado, lo cual debe efectuarse con plena observancia del debido proceso de los intervinientes y dentro de los márgenes trazados por la decisión de amparo.

Ahora bien, la jurisprudencia en la materia es muy precisa en señalar que el poder con el que cuenta el Juez que revisa el incidente de desacato es de carácter disciplinario y deberá, ante todo, verificar el presunto incumplimiento sin que le sea permitido modificar el contenido del fallo de tutela del que se solicita el cumplimiento, pues respecto de dicho fallo ha operado el principio de cosa juzgada; sin embargo, dicha prohibición versa solo sobre la sustancia, es decir, sobre la decisión de amparar el derecho fundamental, no sobre la forma como se va a procurar el amparo.

Ya frente al derecho de petición, el desarrollo jurisprudencial nacional y su posición han sido pacíficas. La respuesta debe ser congruente, de fondo, clara y debidamente notificada al interesado sin que ello implique *per sé* que deba accederse a su solicitud. Al respecto, la Corte Constitucional ha advertido «que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva».¹

Caso concreto

El caso que nos ocupa se enmarca en que la accionada realice todos y cada uno de los trámites internos que se requieran para la consecución de la remisión del expediente contentivo de la pérdida de capacidad laboral del accionante a la junta regional de calificación de invalidez respectiva.

En esta oportunidad, la judicatura encuentra que con los documentos aportados por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”** se tiene por cumplido el fallo de tutela dictado por este operador judicial. Nótese que se informa de manera oportuna que los trámites realizados por la accionada se circunscriben a efectuar el pago de honorarios a favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, mediante oficio ML -H No. 10948 de 2022, de fecha 05/05/2022, y de igual manera se procedió a la remisión del expediente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, mediante comunicación con radicado 2022_5792563 de fecha 05/05/2022, en aras que dicha Junta dirima la inconformidad presentada por el accionante.

Por último, al verificarse que la respuesta fue en efecto remitida a la dirección de física del accionante, considera este Despacho que la decisión de tutela de 03 de mayo de

¹ COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 206 de 28 de mayo de 2018. Expediente T 6.187.295. Mg. Ponente. Dr. Alejandro Linares Cantillo. Citando a su vez a COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL a la Sentencia T 376 de 2017.



este año fue acatada en debida forma.

El presente auto deberá ser comunicado por el medio más expedito a las partes atendiendo que contra el mismo no procede recurso alguno como bien lo ha señalado la jurisprudencia nacional; pues en materia de incidentes de desacato solo procede la consulta ante el superior jerárquico en los casos de imponerse sanción; sin embargo, como quiera que en el presente asunto no se sanciona, se entiende que no procede recurso alguno con la decisión.

La correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexecuibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta (...)²

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

- 1.- ABSTENERSE de iniciar el trámite incidental.
- 2.- COMUNÍQUESE la presente decisión a la parte accionante.
- 3.- Una vez sea devuelto el trámite de tutela de la Corte Constitucional, excluido de revisión, se procederá a efectuar el archivo del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

Jado

² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 243 de treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996). Mg. Ponente. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo

010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **63462292293bad556a3e684b59f2058892ad8a50b30c3c2d7766d9de8f5b9dc6**
Documento generado en 26/05/2022 10:36:37 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>